

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CONSUMO, LA AGENCIA CATALANA DEL CONSUMO DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE LLEIDA, PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE LLEIDA.

REUNIDOS

De una parte, Doña Bibiana Medialdea García, Directora General de Consumo, de acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 224/2020, de 29 de enero, por delegación de competencias del Ministro de Consumo, efectuada mediante Orden CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de créditos para gastos y de delegación de competencias.

De otra parte, Don Francesc Sutrias i Grau, Director de la Agencia Catalana del Consumo de la Generalitat de Catalunya, por el nombramiento efectuado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, mediante Decreto 103/2021, de 1 de junio, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de creación de la Agencia Catalana del Consumo. La suscripción de este Convenio se ha autorizado por acuerdo del Gobierno, de conformidad con el artículo 26.k) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, en relación con el artículo 175.1 del Estatuto de Catalunya.

Y de otra, Don Miquel Pueyo París, Alcalde de Lleida, en virtud del acuerdo 4 de la sesión plenaria núm. 7/2019, de carácter extraordinario, de fecha 15 de junio de 2019. Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene entre otras atribuciones, la de representar al Ayuntamiento de la ciudad, dirigir el gobierno y la administración municipal y todas aquellas otras atribuciones ejecutivas que vienen otorgadas por dicha ley y por el resto de normativa reguladora de las corporaciones locales. Con carácter específico se le otorgan atribuciones para la firma del presente convenio aprobadas por el Pleno municipal en sesión de 30 de abril de 2021.

Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo, de la Comunidad Autónoma de Catalunya y del Ayuntamiento de Lleida.

Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y



EXPONEN

El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

En cumplimiento del mandato constitucional, el Capítulo II, del Título V, del Libro Primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así como el procedimiento de resolución de conflictos.

De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Finalmente, la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b del artículo 3 del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Mediante Convenio de fecha 5 de mayo de 1995, se constituyó la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Lleida (en adelante, la Junta Arbitral), realizando desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos de consumo en su ámbito territorial.

Así pues, el Ministerio de Consumo, la Agencia Catalana del Consumo de la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Ayuntamiento de Lleida, conscientes de la necesidad de facilitar a los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y teniendo en cuenta la experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable dar continuidad a la Junta Arbitral.



Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el Capítulo VI, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de su Disposición Adicional Octava,

ACUERDAN

Primero.- Objeto.

El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Lleida, con sede en Lleida, cuyo ámbito territorial viene determinado por el propio del municipio de Lleida, conocerá, con carácter prioritario, de las reclamaciones de los consumidores de dicho ámbito, en relación con sus derechos legalmente reconocidos, de conformidad con los criterios competenciales y el procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya.

Segundo.- Compromisos de las partes.

1 – El Ayuntamiento de Lleida impulsará, en su ámbito territorial, la gestión y administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta Arbitral, comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un año desde la fecha de eficacia del presente convenio, su acreditación como entidad de resolución alternativa de litigios de consumo, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre.

2 - El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con el Ayuntamiento de Lleida, un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento del Sistema Arbitral de Consumo, en cooperación con la Agencia Catalana del Consumo.

3 – El Ayuntamiento de Lleida facilitará información sobre la designación de Presidente y Secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a la actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.

4 – El Ministerio de Consumo y la Agencia Catalana del Consumo facilitarán el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo en el ámbito territorial del municipio de Lleida.

5 - Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.



Tercero.- Comisión de Seguimiento.

A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de Consumo.

El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuarto.- Modificación del Convenio.

La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Quinto.- No asunción de compromisos financieros.

El presente Convenio configura una actividad de colaboración que no genera compromisos financieros para ninguna de las partes.

Sexto.- Vigencia del Convenio.

El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.

El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».

Séptimo.- Extinción del Convenio.

El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como las siguientes:

- a) Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta Arbitral como Entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud o su denegación.



- b) La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres meses.
- c) La disolución o supresión de alguna de las partes.
- d) Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está incumpliendo los compromisos adquiridos en el presente Convenio, se lo notificará mediante comunicación fehaciente e indicará las causas que originan dicho incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente Convenio.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la Comisión de seguimiento, persistiera el incumplimiento, se entenderá resuelto el Convenio.

El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Octavo.- Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las cuestiones litigiosas que en la ejecución y cumplimiento pudieran aparecer y no quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción.

Noveno.- Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la





Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las partes o por sus representantes acreditados.

EL MINISTRO DE CONSUMO
(P.D. Orden CSM/940/2020, de 6 de octubre)

LA DIRECTORA GENERAL DE
CONSUMO

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA
CATALANA DEL CONSUMO

Bibiana Medialdea García

Frances Sutrias i Grau

EL ALCALDE DE LLEIDA

Miquel Pueyo París

CSV : GEN-c1c8-6d1e-8f67-60b3-f604-b361-e8ec-c723

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : Francesc Sutrias Grau | FECHA : 24/08/2021 11:26 | Sello de Tiempo: 28/08/2021 09:59

FIRMANTE(2) : MIQUEL PUEYO PARIS | FECHA : 25/08/2021 11:40 | Sello de Tiempo: 28/08/2021 09:59

FIRMANTE(3) : BIBIANA MEDIALDEA GARCIA | FECHA : 28/08/2021 09:59 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 28/08/2021 09:59



CONVENI ENTRE EL MINISTERI DE CONSUM, L'AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM, DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE LLEIDA, PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA.

REUNITS

D'una part, la senyora Bibiana Medialdea García, directora general de Consum, d'acord amb el nomenament efectuat pel Reial decret 224/2020, de 29 de gener, per delegació de competències del ministre de Consum, efectuada mitjançant l'Ordre CSM/940/2020, de 6 d'octubre, sobre fixació de límits per a l'administració de crèdits per a despeses i de delegació de competències.

I d'una altra part, el senyor Francesc Sutrias i Grau, director de l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, pel nomenament efectuat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Decret 103/2021, d'1 de juny, i en virtut del que disposa la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum. La subscripció d'aquest Conveni s'ha autoritzat amb un acord del Govern, de conformitat amb l'article 26.k de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, en relació amb l'article 175.1 de l'Estatut de Catalunya.

I d'una altra, el senyor Miquel Pueyo Paris, Alcalde de Lleida, en virtut de l'acord 4 de la sessió plenària número 7/2019, de caràcter extraordinari, de data 15 de juny de 2019. Que, de conformitat amb el previst en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, tenen entre altres atribucions, la de representar a l'Ajuntament de la ciutat, dirigir el govern i l'administració municipal i totes aquelles altres atribucions executives que venen atorgades pel dita llei i per la resta de normativa reguladora de les corporacions locals. Amb caràcter específic s'acorden les atribucions per a la signatura del present conveni aprovades pel Ple municipal en sessió de data 30 d'abril de 2021.

Actuant, respectivament, en nom del Ministeri de Consum, de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Lleida.

Cadascun dels signants, en l'exercici de les seves facultats, compareixen i



EXPOSEN

L'article 51 de la Constitució espanyola insta els poders públics a garantir la defensa dels consumidors i usuaris, i a protegir-ne, mitjançant procediments eficaços, la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics.

En compliment del mandat constitucional, el capítol II del títol V del llibre primer del text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, estableix el règim jurídic del Sistema Arbitral de Consum, i faculta el Govern perquè reglamentàriament n'estableixi l'organització, la gestió i l'administració, així com el procediment de resolució de conflictes.

De conformitat amb aquest mandat, el Govern va aprovar el Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum, que estableix el mecanisme perquè els conflictes de consum puguin resoldre's en aquesta via de caràcter immediat i àgil, sense minvament de les garanties i drets que s'han de reconèixer a les parts, i que incorpora, així mateix, les novetats ofertes per la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge.

Finalment, la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, completa el marc legal de l'arbitratge de consum. L'ordenació i gestió del Sistema Arbitral de Consum corresponen al Ministeri de Consum, a través de la Direcció General de Consum, tal com recull la lletra *b* de l'article 3 del Reial decret 495/2020, de 28 d'abril, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Consum i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

Mitjançant el Conveni de data 5 de maig de 1995, es va constituir la Junta Arbitral de Consum de l'Ajuntament de Lleida (d'ara endavant, la Junta Arbitral), que des de llavors ha realitzat una important tasca per resoldre conflictes de consum en el seu àmbit territorial.

Així doncs, el Ministeri de Consum, l'Agència Catalana del Consum i l'Ajuntament de Lleida, conscients de la necessitat de facilitar als consumidors un mitjà eficaç de resolució de conflictes i tenint en compte l'experiència positiva des que es va constituir la Junta Arbitral, consideren aconsellable donar-hi continuïtat.



Per això, i en compliment de la nova regulació dels convenis que conté el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i de la seva disposició addicional vuitena,

ACORDEN

Primer. Objecte.

L'objecte d'aquest Conveni és determinar que la Junta Arbitral de Consum de l'Ajuntament de Lleida, amb seu a Lleida, l'àmbit territorial de la qual ve determinat pel propi del municipi de Lleida, ha de conèixer, amb caràcter prioritari, de les reclamacions dels consumidors d'aquest àmbit, en relació amb els seus drets legalment reconeguts, de conformitat amb els criteris competencials i el procediment establert en el Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum, o la disposició que el substitueixi.

Segon. Compromisos de les parts

1. L'Ajuntament de Lleida ha d'impulsar, en el seu àmbit territorial, la gestió i l'administració de l'arbitratge institucional de consum per mitjà de la Junta Arbitral, i es compromet a sol·licitar davant la Direcció General de Consum, en el termini d'un any des de la data d'eficàcia d'aquest Conveni, l'acreditació com a entitat de resolució alternativa de litigis de consum, de conformitat amb el que preveu la Llei 7/2017, de 2 de novembre.
2. El Ministeri de Consum ha d'establir, en col·laboració amb l'Ajuntament de Lleida, un sistema d'informació recíproc per al bon funcionament del Sistema Arbitral de Consum, en cooperació amb l'Agència Catalana del Consum.
3. L'Ajuntament de Lleida ha de facilitar informació sobre la designació del president i el secretari de la Junta Arbitral, així com qualsevol altra dada referent a l'activitat de la Junta, empenant els models i informes que es determinin.
4. El Ministeri de Consum i l'Agència Catalana del Consum han de facilitar l'assessorament tècnic i jurídic necessari per al desenvolupament del Sistema Arbitral de Consum en l'àmbit territorial del municipi de Lleida.
5. Les institucions signants es comprometen a difondre tant el Sistema Arbitral de Consum perquè en prenguin coneixement la ciutadania en general, les empreses i els agents econòmics implicats, com la promoció d'ofertes públiques d'adhesió.



Tercer. Comissió de Seguiment.

A l'efecte del seguiment i control d'aquest Conveni, es crea una Comissió de Seguiment, que es reunirà anualment, amb la possibilitat de fer-ho a través de mitjans telemàtics, i que estarà formada per un representant de cada institució signant. La Secretaria correspondrà a un funcionari de la Direcció General de Consum.

El règim de funcionament i organització de la Comissió de Seguiment, en allò que no prevegi aquest Conveni, serà el que disposa per als òrgans col·legiats la secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Quart. Modificació del Conveni.

La modificació d'aquest Conveni requereix l'acord unànim i per escrit dels signants, que s'ha de formalitzar en una addenda, subscripta a aquest efecte, conforme als requisits legalment establerts i amb l'autorització prèvia que preveu l'article 50 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

Cinquè. No assumptió de compromisos financers.

Aquest Conveni configura una activitat de col·laboració que no genera compromisos financers per a cap de les parts.

Sisè. Vigència del Conveni.

Aquest Conveni tindrà una vigència de quatre anys, prorrogables abans que finalitzi, per acord mutu de les parts, per un període de fins a quatre anys addicionals, que s'ha de formalitzar mitjançant una addenda al Conveni.

Aquest Conveni resultarà eficaç una vegada inscrit, en el termini de 5 dies hàbils des de la formalització, en el Registre Electrònic Estatal d'Òrgans i Instruments de Cooperació del sector públic estatal. Així mateix, s'ha de publicar en el *Butlletí Oficial de l'Estat* en el termini de 10 dies hàbils des de la formalització.

Setè. Extinció del Conveni.

El Conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o perquè s'incorri en una causa de resolució. Són causes de resolució del Conveni les que recull l'article 51.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com les següents:

- a) El transcurs del termini previst per sol·licitar l'acreditació de la Junta Arbitral com a entitat de resolució alternativa acreditada sense haver-ne fet la sol·licitud o per haver-se denegat.



- b) La denúncia anticipada i motivada de qualsevol de les parts, que ha de ser comunicada a l'altra part, mitjançant el preavís oportú amb un termini mínim de tres mesos.
- c) La dissolució o supressió d'alguna de les parts.
- d) Quan una de les parts consideri que qualsevol de les altres parts incompleix els compromisos adquirits en aquest Conveni, li ho ha de notificar mitjançant una comunicació fefaent en què ha d'indicar les causes que n'originen l'incompliment. Aquest requeriment s'ha de comunicar igualment als representants de la Comissió de Seguiment. L'altra part pot esmenar aquesta situació en un termini no superior a un mes, a comptar de la data d'enviament de la notificació. En tot cas, la Comissió de Seguiment pot decidir sobre l'adopció immediata de les mesures correctores oportunes per garantir el compliment dels compromisos adquirits en aquest Conveni.

Si transcorregut el termini indicat en el requeriment i malgrat l'actuació de la Comissió de Seguiment persisteix l'incompliment, s'entendrà resolt el Conveni.

El compliment i la resolució del Conveni donaran lloc a la liquidació d'aquest a fi de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. La Comissió de Seguiment del Conveni ha de decidir, en cas de resolució anticipada del Conveni, sobre la forma d'acabar les actuacions en curs, d'acord amb el que preveu l'article 52.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

Vuitè. Règim jurídic i qüestions litigioses.

Aquest Conveni té naturalesa administrativa, no pas contractual, i en allò que no disposa cal atènyer-se al que preveu el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa en el si de la Comissió de Seguiment les discrepàncies que puguin sorgir sobre la interpretació, desenvolupament, modificació, resolució i efectes que puguin derivar-se de l'aplicació del Conveni. Les qüestions litigioses que en l'execució i el compliment puguin aparèixer i no quedin resoltes per la Comissió de Seguiment, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de l'esmentada jurisdicció.

Novè. Protecció de dades de caràcter personal.

El tractament de les dades personals que, com a conseqüència de l'execució del Conveni, calgui realitzar, s'ha de fer conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.





I, com a prova de conformitat i acceptació, signen aquest Conveni les parts o els seus representants acreditats.

El Ministre de Consum
(P.d. Ordre CSM/949/2020, de 6 d'octubre)

La directora general de Consum

El director de l'Agència Catalana del Consum

Sra. Bibiana Medialdea García

Sr. Francesc Sutrias i Grau

L'alcalde de Lleida

Miquel Pueyo París

CSV : GEN-c1c8-6d1e-8f67-60b3-f604-b361-e8ec-c723

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : Francesc Sutrias Grau | FECHA : 24/08/2021 11:26 | Sello de Tiempo: 28/08/2021 09:59

FIRMANTE(2) : MIQUEL PUEYO PARIS | FECHA : 25/08/2021 11:40 | Sello de Tiempo: 28/08/2021 09:59

FIRMANTE(3) : BIBIANA MEDIALDEA GARCIA | FECHA : 28/08/2021 09:59 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 28/08/2021 09:59

